

## La presión sobre los poderes

*Viernes, 6 de mayo de 1938*

La suerte de la República española, tan herida —quizás mortalmente—, entristece a los republicanos y aconseja obtener unas lecciones útiles para salvar otras democracias.

La primera y la más importante de dichas lecciones es que los regímenes democráticos perecen pero no siendo víctimas de sus adversarios —que se verían forzados a la impotencia, incluso a la adhesión— sino que mueren más bien a manos de sus partidarios; es decir, a consecuencia de los excesos y de las imprudencias de éstos. Y entre las causas más graves e inmediatas de la agonía de la República española, hay que señalar ese fenómeno vergonzoso que hemos llamado, con una complacencia indigna, la presión de la calle, o la de las masas.

Después de las elecciones de febrero de 1936, el gobierno del Frente Popular fue constituido únicamente por la mitad menos exaltada oficialmente, y sobre todo la más débil en realidad de esa formación política. Los partidos fuertes y extremistas, los proletarios y los revolucionarios, quedaron fuera, incluso aparentando no empujar al ministerio hacia la exageración. En realidad era para manejarlo mejor, y con una entera e irresponsable libertad. Esos extremistas utilizaron, para expresar sus deseos, incluso sus intimidaciones, el método de manifestaciones tumultuosas, que aceptamos padecer, dándole el nombre asegurador e hipócrita de «presión de masas o de la calle».

Pronto fue absolutamente inútil mostrar al gobierno, así sometido y dominado, los peligros que serían —para él mismo y para el régimen— las consecuencias inevitables del sistema. Tan inoperante como renqueante se reveló la precaución gubernamental de asociarse a las manifestaciones de la calle. Un día, ¿acaso el ministro de la guerra y el del interior no presidieron ellos mismos una de esas manifestaciones... Y en el momento que tenía que disolverse la muchedumbre decidió... ir a quemar las iglesias en la vecindad y bajo la mirada del ministerio del interior? La luz roja del incendio penetró por las ventanas, sin iluminar a los ciegos gobernantes.

El ministerio había decidido aceptar las presiones, porque las interpretaba como el sostén de los partidos extremistas y quería incluso utilizarlas para amenazar a los otros poderes del Estado, no sometidos al Frente Popular. Fue así como arrancamos a la Diputación permanente de las Cortes derechistas, como necesidad absoluta del orden público, una amnistía que, votada y deliberada sin libertad ni reflexión, llevaba a consecuencias tales como obligar a familias humildes del pequeño comercio a la readmisión indemnizada —en la promiscuidad estrecha de una pequeña boutique— de presidiarios que habían asesinado unos meses antes al padre o al hermano de esos jefes casi proletarios y hoy condenados a padecer una igual monstruosidad. Forzamos así a la Banca de España a aceptar los servicios de los autores de robos y asesinatos, al igual que el autor del homicidio fallido del primer gobernador de dicha banca.

La presión de la calle fue también invocada para imponerme la firma —que rechacé sin dudar— de un decreto gubernamental que colocaba toda la propiedad rural de España bajo los caprichos de comisiones arbitrales... y arbitrarias, que hubieran podido, a su buen entender, desposeer a los propietarios de sus bienes, sin garantías de llamamiento a los tribunales, para regalárselas a las asociaciones de colectivistas, o a determinados individuos. Rechazando firmar, según el artículo 16 de la Constitución, de la que yo era el guardián, exigí el voto de las Cortes para tomar una medida así, hecha la reserva acerca de la facultad del Tribunal de Garantías para declarar, llegado el caso, la inconstitucionalidad de la futura ley.

Cuando el gobierno se deshizo de los demás poderes no sometidos a control y al miedo del Frente Popular, acarició la ilusión ingenua de escapar a la tensión demagógica. Era demasiado tarde, era, además, tan imposible como innecesario. No se puede andar de ninguna manera contra la naturaleza de las cosas. Sin embargo, la manifestación tumultuosa de las masas o de la calle sólo es una protesta contra la autoridad y es una locura que ésta piense en convertirse en su directora. Incluso conformándose con ser su instrumento, sin iniciativa y sin fuerza, no será más que la engañada y la víctima.

Una democracia es, más que cualquier otra forma de gobierno, un régimen de orden y de ley. No puede ser dirigida por el motín y el desorden, que la matarían pronto.

Cierto, una democracia republicana es un régimen de opinión popular soberana, pero de opinión total y expresa según las leyes constitucionales. Sin embargo, la presión de las masas o de la calle no tiene nada en común con el sufragio y las elecciones. Aquélla no alcanza ni siquiera el rango de desprecia-

ble y sospecha de un plebiscitismo minoritario e irregular,

Todo gobierno es por esencia y por definición responsable, y para serlo debe quedarse libre y dueño de sí mismo. Las presiones irregulares no son más que el régimen de los poderes irresponsables.

Según la clasificación jurídica, secular y clásica de las cosas, la calle es un bien común, que para pertenecer a todos y para que todos puedan utilizarla pacíficamente, debe estar sometida al único e indiscutible control de la autoridad. Cuando no domina la calle, la autoridad ya ha muerto y sólo espera ser enterrada. El que es dueño de la calle es —por la posesión de ese signo exterior, pero simbólico y esencial— el dueño de la situación. Entonces, la presión admitida como sistema de gobierno sólo es la anarquía, primero larvada y pronto ensangrentada. Es el anuncio del fin de las democracias y el preámbulo de las reacciones dictatoriales. Un gobierno democrático debe sentir y seguir los deseos de la opinión y de aquéllos partidos que lo sostienen; pero con la condición absoluta que sean canalizados según la ley, lo que es la exigencia de la libertad, del progreso y la salvación de la república.